

de controlar esa actividad probatoria y de ejercer en su más plena manifestación su derecho de defensa material; con lo cual, si él voluntariamente se aparta del juicio, no existe razón alguna para que eso provoque la suspensión del juicio y el consecuente desmedro al interés de la justicia.

2.5. Defensores.

2.5.1. De oficio.

El párrafo tercero del art. 101 CPP aprobado, ha estatuido la facultad del juez de nombrar un defensor de oficio cuando “resulte imposible la defensa particular o pública”. Esto puede estimarse como un esfuerzo de garantizar una efectiva asistencia letrada al imputado durante el proceso, tal como también lo instituyen normas internacionales de derechos humanos como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su art. 14.3.d. Sin embargo, la designación al imputado de un defensor de oficio ha de realizarse de manera muy excepcional; en principio y preferentemente debe atenderse a la voluntad del imputado con relación a la designación de un defensor de su elección, pues así lo establecen los arts. 8.2.d de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el art. 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que un ejercicio óptimo del derecho de defensa no se logra con el solo nombramiento de un defensor al imputado, sino que es indispensable que el imputado cuente con un abogado de su preferencia, lo contrario, esto es, nombrar un defensor contra la expresa voluntad de la persona procesada, traería aparejada una flagrante vulneración a la garantía de inviolabilidad de la defensa⁴⁰.

Es decir, que el nombramiento de defensor de oficio solo puede hacerse con la aquiescencia, expresa o tácita, del imputado y no podrá suplir, pues, la asistencia del defensor requerido expresamente por el imputado; salvo supuestos, como el abandono o la renuncia y frente a la imposibilidad de que en esos casos se pueda apersonar de inmediato un defensor público. Porque tampoco puede permitirse el empleo del abandono o la renuncia como estrategias de demora en la realización de actos procesales urgentes y perentorios.

2.6. Víctimas y querella

⁴⁰. Sentencia CPS 23904.05, pronunciada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de febrero de 2005.